

Contradicciones en las políticas gubernamentales para el agro: la agroindustria palmera requiere una mejor y mayor atención

A finales del mes de febrero de 2016 el Gobierno Nacional, argumentando preocupación por el aumento de la inflación de alimentos y la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, decidió suspender temporalmente, por un periodo de seis meses, la aplicación del Sistema Andino Franjas de Precios, SAFP, y diferir a 0 % el arancel de importación de los aceites y grasas en Colombia.

Esta medida unilateral, rechazada por Fedepalma y el sector palmero en su oportunidad, vulneró el proceso de internacionalización gradual pactado para el sector en los distintos Tratados de Libre Comercio, TLC, suscritos por el país; afectó los precios locales del aceite de palma en alrededor del 20 % y generó una pérdida de ingresos para la agroindustria de la palma de aceite del orden de \$ 220.000 millones de pesos en dicho período.

Lo preocupante de esta medida es que no es algo aislado, se suma a una serie de hechos que han generado preocupación e incertidumbre a los inversionistas y productores del agro colombiano en los últimos tiempos. Tal es el caso de la inseguridad jurídica sobre los derechos de propiedad de la tierra rural, resultado de la interpretación con retroactividad de la Ley 160 de 1994; la aplicación de la Ley de restitución de tierras a propietarios que de buena fe adquirieron sus terrenos y adelantaron proyectos productivos; los cuestionamientos y el asedio por parte de las autoridades laborales a empresas organizadas que operan en el campo, donde abunda la informalidad, desconociendo sus avances en formalización y generación de empleo. También son preocupantes; los cambios en los incentivos para promover la inversión rural, que en su momento impulsaron proyectos agrícolas de gran escala y de Alianzas Productivas con pequeños y medianos productores, que frenaron su dinámica.

De igual forma, las sanciones a empresas del sector azucarero por presuntas violaciones a la Ley de Competencia, cuando en ella se estipula que el sector agrícola, por sus características, debe tener un tratamiento especial, lo cual sigue sin reglamentarse; los cuestionamientos y acciones contra los Fondos de Estabilización de Precios Agrícolas; la falta de voluntad política para atender suficientemente y superar la grave situación fitosanitaria de los cultivos de palma de aceite en Tumaco, Nariño, y Puerto Wilches, Santander, entre otros; y la crítica permanente en algunos sectores del gobierno a las reglas de juego establecidas para la promoción y desarrollo de los biocombustibles, que en el caso del biodiésel de palma no ha permitido avanzar gradualmente en el incremento de mezclas al 15 % (actualmente la mezcla promedio en el país es del 9,2 %), para luego llegar hasta el 20 %, afectando la comercialización y comprometiendo la viabilidad futura de muchos productores que sembraron para ese mercado.

En contraposición, el Gobierno plantea su interés de apoyar el sector agrícola, promover el desarrollo rural, incrementar las siembras y aumentar la producción; suscribió compromisos internacionales en materia de reducciones de gases de efecto invernadero, GEI, donde el agro tiene mucho que aportar y ganar; desarrolló recientemente el marco legal para viabilizar las energías renovables, como la de biomasa; lanzó la iniciativa Plan Colombia Siembra, para crecer el área agrícola en un millón de hectáreas; impulsó y sancionó la Ley Zidres, para promover nuevos emprendimientos agro empresariales y desarrollar regiones apartadas del país; adelantó la Misión de Transformación del Campo Colombiano, con el fin de emprender acciones para cerrar las brechas entre lo rural y lo urbano; y señala al campo como el gran protagonista en el post conflicto, una vez se suscriba el acuerdo con las FARC.

En ese orden de ideas, parecieran existir contradicciones en la política gubernamental para el agro, pues mientras se dan señales para impulsarlo, también hay muchas acciones y hechos que generan desconfianza e incertidumbre. Esta situación, bastante incomprensible, limita el desarrollo competitivo y sostenible del agro colombiano, que cuenta con una extensa frontera agrícola con bajo aprovechamiento, con recursos hídricos importantes y una amplia oferta de mano de obra en búsqueda de oportunidades de trabajo formal, estable y bien remunerado.

Fedepalma confía en que el Gobierno cumplirá su palabra y levantará la medida del diferimiento arancelario tan pronto se cumplan los seis meses de vigencia, para así retornar al escenario de gradualidad en la reducción de aranceles para los aceites de palma y los demás aceites y grasas.

Igualmente, esperamos que el Gobierno continúe en su tarea para superar definitivamente la inseguridad jurídica sobre la tierra y que la producción empresarial reciba el reconocimiento que merece. Así mismo, que tome medidas de apoyo efectivas para la producción nacional de biocombustibles y se incrementen las mezclas de acuerdo con la producción de la materia prima agrícola y la capacidad industrial de procesamiento, así como acciones en los demás aspectos que tanto preocupan a empresarios e inversionistas.

La agroindustria de la palma de aceite es una actividad de largo plazo (un ciclo productivo dura por lo menos 25 años) que requiere reglas de juego claras y estables, y políticas públicas adecuadas y coherentes que estimulen su competitividad y desarrollo. ¡Sin un agro próspero difícilmente se consolidará la tan anhelada paz!

Contradictions in Colombia's Public Policies for the Agricultural Sector: Oil Palm Agro-industry Requires Better and Greater Support

At the end of February 2016, Colombia's National Government expressed their concern over inflationary pressures stemming from increases in food prices and the subsequent loss of consumers' purchasing power. Using this argument, the Government proceeded to temporarily suspend, for a period of six months, the application of The Andean Community's Price Band System (SAFP), and set a 0% the import tariff for oils and fats.

This unilateral measure, rejected at the time by Fedepalma and the oil palm industry, has undermined the gradual internationalization process agreed for the sector in the various Free Trade Agreements (FTA) recently signed by Colombia. The immediate effect of such measure was a 20% reduction in local palm oil prices with an estimated income loss to the oil palm industry of \$220 billion pesos.

The worrisome aspect of this measure is that it is not an isolated measure; it is linked to a series of actions that undermine confidence in the sector for current actors and potential investors. The same can be said about the uncertainty of property rights for rural lands, created by Law 160 of 1994 and its application retroactively; the application of the Land Restitution Law to land owners who acquired lands in good faith and implemented production projects; the constant questioning by labor authorities to organized companies that operate in rural areas, where there is a great deal of informality, ignoring their achievements in job creation and job formalization. It is also a reason of concern the recent changes in the incentives designed to generate rural investment, such as productive alliances between small producers with medium and large-size producers. Creation of such type of alliances practically came to a halt.

It is also concerning that the sugar industry is hit with heavy fines for violations to the competition laws, even though the same laws stipulate that the entire agricultural industry should have a preferential treatment which is yet to be defined by the regulatory authorities. The price stabilization funds continue to be under attack. There continues to be a lack of political will to sufficiently support and overcome the critical phytosanitary situation of the oil palm crops in Tumaco, Nariño, and Puerto Wilches, Santander, among others; and the permanent criticism by some Government sectors to the rules set for promoting and developing biofuels, which in the case of palm oil biodiesel, has not permitted the gradual advance in the increase of blends rates to 15% (the average blend in the country is currently 9,2%), and 20%, affecting commercialization and risking financial feasibility for many investors that put money in oil palm crops with the promise of the biofuel market.

In contrast, the Government expresses their interest in supporting the agricultural sector, promoting rural development, increasing plantations and production; it has signed international agreements for reducing greenhouse emissions (GHG), a field where the agricultural sector can greatly contribute and profit from; and recently has developed the legal framework to make renewable energies from biomass possible. The Government has also launched the initiative called *Plan Colombia Siembra* in order to make the agricultural area grow by a million hectares; fostered and created the Zidres Law to promote new agribusiness initiatives and to develop isolated regions in the country; advanced in the creation of a mission to transform the Colombian farmland, called *Misión para la Transformación del Campo Colombiano*, with the purpose of starting actions to close gaps between the rural and the urban sectors; and refers to lands as the key factor in the post-conflict context once the peace agreement with the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) is signed.

Based on the arguments presented above, there seems to be contradictions in Colombia's public policies in the agricultural sector; on one hand, there are actions that seem to promote growth in the sector but at the same time there are policies that erode investor confidence. Such ambiguity in public policy hinders the development of a competitive and sustainable agricultural industry in Colombia, a country that has a vast frontier for agricultural development; with significant water resources and a labor force of qualified workers looking for stable, formal and well-paid job opportunities.

Fedepalma is confident that the Government will hold true to their word and suspend the measure for tariffs deferral as soon as the six-month term expires, with a return to a scenario of gradual reduction of tariffs for all oil and fats.

We also expect the Government to continue doing what is necessary to put an end to the legal uncertainty on land tenure and give commercial agriculture the importance it deserves. Moreover, we expect the Government to take effective measures in order to support domestic production of biofuels and increase blending rates according to the availability of local feedstock and industrial processing capacity, as well as actions in all other aspects that high concern to entrepreneurs and investors.

Oil palm agribusiness is a long-term activity (with a production cycle of at least 25 years) that requires clear and stable rules as well as suitable and coherent public policies that foster competitiveness and development. Without a prosperous agricultural industry, the peace, so longed for in our country, could hardly get a fighting chance to consolidate!